



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de septiembre de 2023

PROCESO: ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA  
DEMANDANTE: LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA  
DEMANDADO: COLPENSIONES  
RADICADO: 0526613105 – 001 2020 00051-01  
ACTA N°: 74

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA** en contra de **COLPENSIONES** para pronunciarse en virtud del grado jurisdiccional de **CONSULTA** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 74** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. LA DEMANDA<sup>1</sup>

El demandante pretende con este proceso se condene al reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, con intereses moratorios o en subsidio indexación.

Para sustentar sus pretensiones afirmó, en síntesis: **i)** El señor **LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA** nació el **25 de agosto de 1955**, se afilió al Sistema General de Seguridad Social el día **29 de agosto de 1978** en el ISS - hoy COLPENSIONES- registrando la última cotización en marzo de 2016. **ii)** Solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el **30 de abril de 2018** que fue negada con Resolución **SUB 134041 del 21 de mayo de 2018** argumentando que no cumple con los requisitos exigidos en ley 797 de 2003, pues solo acreditaba 1.290 semanas. El **18 de marzo de 2019** volvió a solicitar la pensión siendo negada con la Resolución **SUB 133880 del 29 de mayo de 2019** en la que se indicó que solo contaba con 1291 semanas, pero al revisar la historia laboral expedida el 08 de febrero de 2019, la entidad omitió contabilizar la totalidad de los períodos que detalla

---

<sup>1</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 01 / Pág. 3 - 10

en el Hecho Sexto. Contabilizando la totalidad de semanas logró acumular **1.302,28 semanas para el 2017**, fecha en la que cumple 62 años. **iii)** Finalmente señala que los recursos interpuestos fueron resueltos **negativamente** con las Resoluciones **SUB 203820 del 31 de julio de 2019** y **DEP 8450 del 26 de agosto de 2019**.

## 2. CONTESTACIÓN COLPENSIONES<sup>2</sup>

En la contestación, la administradora del Régimen de Prima Media se opuso a todas las pretensiones, señalando que ante la solicitud de corrección de historia laboral radicada por el actor en el año 2018, COLPENSIONES una vez realizadas las investigaciones, determinó lo siguiente:

- Con relación al periodo comprendido entre 1996-12-01 hasta 1997-12-01 a nombre del empleador PAVEZGO LTDA; se encontró que los ciclos 199701 a 199712, no proceden para cobro, debido a que el empleador reportó novedad de retiro (R) en el ciclo 199612.
- Con relación al periodo comprendido entre 2005-01-01 hasta 2005-01-01 a nombre de LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA; se visualiza que como aportante independiente efectuó pagos por concepto de seguridad social para el ciclo 200501, pero no fueron suficientes para cubrir los valores totales correspondientes de las cotizaciones, quedando intereses pendientes por pagar, situación que se manifiesta en la contabilización inexacta de días.
- Con relación al periodo comprendido entre 2006-01-01 hasta 2006-01-01 a nombre de LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA; se visualiza que como aportante subsidiado efectuó pagos por concepto de seguridad social para el ciclo 200601, pero no fueron suficientes para cubrir los valores totales correspondientes de las cotizaciones, quedando intereses pendientes por pagar, situación que se manifiesta en la contabilización inexacta de días.
- Con relación al periodo comprendido entre 2012-10-01 hasta 2012-10-01 a nombre de LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA; se visualiza que el ciclo 201210 se refleja con la observación "pago incompleto" y por lo tanto no se contabilizan en el total de semanas cotizadas debido a que el pago realizado fue efectuado por un valor inferior al correspondiente de acuerdo a las tarifas establecidas al grupo poblacional que le fue asignado en su momento por el consorcio Colombia Mayor.
- Con relación al periodo 2013-08-01 hasta 2013-08-01 a nombre de LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA; se visualiza como aportante subsidiado efectuó pagos por concepto de seguridad social para el ciclo 201308, pero no fueron suficientes para cubrir los valores totales correspondientes de las cotizaciones, quedando intereses pendientes por pagar, situación que se manifiesta en la contabilización inexacta de días.
- Con relación al periodo 2015-12-01 hasta 2015-12-01 a nombre de LUIS

FERNANDO TAMAYO OCHOA; se visualiza que el ciclo solicitado se encuentra acreditado correctamente en la historia laboral del accionante, de acuerdo a lo reportado por el empleador en su momento.

Propuso entre otras excepciones las que denominó: INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE VEJEZ, PRESCRIPCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA PEDIR, COBRO DE LO NO DEBIDO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, EXCEPCIÓN INNOMINADA DE DESCUENTO DEL RETROACTIVO POR SALUD.

## 3. SENTENCIA<sup>3</sup>

En la audiencia del **24 de enero de 2023<sup>4</sup>** la **JUEZ PRIMERA LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO**, tomó las siguientes decisiones: **i) DECLARÓ** que al señor LUIS FERNANDO

<sup>2</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 01 / Pág. 1 – 9

<sup>3</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 18

<sup>4</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 18 / Min 46:00

TAMAYO OCHOA le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez; en consecuencia, **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocerle \$60.980.062 por retroactivo pensional por el período comprendido entre el 25 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2022. Y que a partir del 1º de enero del 2023 siguiera reconociendo y pagando pensión de vejez en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad. **AUTORIZÓ** a COLPENSIONES descontar del retroactivo el valor correspondiente a las cotizaciones en salud. **ii) CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar intereses moratorios a partir del día 30 de agosto de 2018, causados sobre el valor del retroactivo reconocido y las mesadas que se causen, desde la fecha en que debió hacerse el pago de la mesada y hasta el día efectivo de la cancelación de la obligación, a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. **iii) CONDENÓ** en Costas a cargo de COLPENSIONES.

#### **4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia, La apoderada de **COLPENSIONES**<sup>5</sup>, decidió intervenir para solicitar la REVOCATORIA de la sentencia, en los siguientes términos: **i)** Respecto a la pensión de vejez, reitera los planteamientos esbozados en la contestación de la demanda insistiendo en la respuesta que se emitió en su momento a la solicitud de corrección de historia laboral que efectuó el demandante en el año 2018, para insistir en que r que las semanas que se evidencian en la historia laboral son las efectivamente cotizadas (es decir, 1291,14); por lo cual no se acreditan las 1300 exigidas para el reconocimiento de la prestación solicitada. **ii)** Respecto a los intereses dice que no proceden y luego de invocar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 precisa que sólo se originan en relación con aquellas obligaciones prestacionales que se encuentran debidamente reconocidas y respecto de las cuales existe retardo en el pago de las mismas.

#### **5. EL DEMANDANTE ACREDITA EL DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ.**

La Juez de instancia encontró acreditada la causación del derecho pensional del señor LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA bajo los parámetros establecidos en el artículo **33 de la ley 100 de 1993** modificado por **la ley 797 de 2003**, por contar con **62 años de edad y 1.302,56 semanas**, porque a partir de la información de la historia laboral generada el **19 de febrero de 2020**<sup>6</sup>, tuvo en cuenta los siguientes ciclos que fueron reseñados en el hecho SEXTO de la demanda, desatendiendo los argumentos propuestos por COLPENSIONES al responder la solicitud de corrección de historia laboral, replicados en la contestación:

<sup>5</sup> Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 09

<sup>6</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 05 / 27 – 34

Periodos no tenidos en cuenta por Colpensiones				
Desde	Hasta	Días reportados	Días cotizados	Diferencia
01-dic-1996	31-nov-1996	22	17	5
01-ene-2005	31-ene-2005	30	8	22
01-ene-2006	31-ene-2006	30	21	9
01-oct-2012	31-oct-2012	30	0	30
01-ago-2015	31-agos-2015	30	18	12

Total de días	78
Total de semanas	11,14

En efecto, respecto a la inconsistencia que se presenta en el **año 1996**, se argumenta en la sentencia que deben sumarse **5 días** por el mes de diciembre de 1996 porque el empleador PAVEZGO reportó 22 con novedad de Retiro y la entidad solo contabiliza 17.

890915335	PAVEZGO LTDA	SI	199612	10/01/1997	51036301019523	\$ 143.485	\$ 15.600	\$ 0	R	22	17	Pago aplicado al periodo declarado
-----------	--------------	----	--------	------------	----------------	------------	-----------	------	---	----	----	------------------------------------

Comparte la Sala el razonamiento que se efectúa en la providencia, pues no existe justificación alguna para que la entidad de manera obstinada desconozca cinco (5) días por ese ciclo, cuando en la misma historia laboral se demuestra que se cotizaron 22 reportando la novedad de retiro. No es éste un tema de mora del empleador, se trata de una inconsistencia que el señor **TAMAYO OCHOA no tiene por qué soportar**, siendo que claro que es a COLPENSIONES a quien le corresponde la obligación de **custodiar la historia laboral** garantizando un contenido **confiable y manejo transparente (CSJ SL 4167 de 2021)**. En la sentencia **SU 405 de 2021** la Corte Constitucional generó unas subreglas de decisión en tratándose de inconsistencias en la historia laboral, entre ellas, que la carga de la prueba sobre la exactitud o veracidad de los datos que en ella obran recae sobre las administradoras de pensiones; y que la desorganización o el descuido, no pueden repercutir negativamente en el trabajador.

Pero se verifica por esta corporación que en el caso de la demandante también se presentó mora con ocasión de sus cotizaciones a través del Programa de Subsidio del Aporte en Pensión- PSAP - del Fondo de Solidaridad Pensional, lo que constituyó finalmente la causa de la negativa al reconocimiento pensional con las Resoluciones **SUB 134041 21 de mayo de 2018<sup>7</sup>, SUB 133880 del 29 de mayo de 2019<sup>8</sup> y SUB 203820 del 31 de julio de 2019<sup>9</sup>**, actos administrativos en los que la entidad niega el derecho afirmando que el actor sólo cotizó **1.291 semanas**.

Pues bien, en relación con este aspecto esta corporación también comparte los planteamientos efectuados por la Aquo, porque no queda duda que en este caso no se acreditó por COLPENSIONES el haber efectuado requerimiento alguno al señor LUIS

<sup>7</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 01 / Pág. 15 – 18

<sup>8</sup> PRIMERA INSTANCIA- archivo 01 – página 52

<sup>9</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 01 / Pág. 34 - 37



FERNANDO TAMAYO OCHOA para notificarle sobre la supuesta irregularidad en el pago de sus aportes, ni tampoco efectuó el cobro oportuno a **FIDUAGRARIA**; comprometiendo de este modo su condición de beneficiaria del esquema solidario con el consecuente desconocimiento de tales períodos en su historia laboral, circunstancia que en manera alguna puede ser oponible a la demandante y mucho menos, el acarrear la pérdida del derecho al subsidio por cada uno de esos períodos.

Sea lo primero señalar que los **artículos 23 y 24 del Decreto 3771 de 2007** por el cual se reglamentó la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional, consagran las posibilidades de suspensión y pérdida del derecho al subsidio al aporte en pensión, entre otras causales, **cuando el beneficiario deja de cancelar durante seis meses o más el aporte correspondiente**; pero para ello, es presupuesto *sine qua non* que la entidad administradora de pensiones informe, no solo al Encargado Fiduciario sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar, sino que también debe poner en conocimiento al interesado para que adopte la conducta que estime pertinente en aras de no comprometer su condición de beneficiario del régimen subsidiado y para que, además, ejerza su derecho de contradicción y de defensa. La Sala de Casación Laboral en la sentencia **SL13542-2014** señaló sobre el particular lo siguiente:

Ahora bien, en lo que sí tiene razón la censura es en lo que atañe a la suspensión de la condición de afiliado del accionante, puesto que aunque pareciera inabordable el estudio de la acusación por la alusión a cuestiones fácticas en un cargo enderezado por la senda directa, la verdad es que es posible hacer abstracción de estas referencias y resolver desde lo jurídico.

En concreto, en lo que a la subcuenta de solidaridad concierne, el objeto del Fondo de Solidaridad Pensional es subsidiar las cotizaciones al sistema de pensiones de trabajadores subordinados o independientes de los sectores rural y urbano de los grupos de población más desprotegidos, que por su especial situación de insuficiencia de recursos no pueden realizar íntegramente el aporte.

Es uno de los desarrollos del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y se encuentra regulado por el Decreto 3771 de 2007, en cuyo precepto 13 consagra los requisitos para hacerse merecedor de los beneficios de la subcuenta de solidaridad, a saber: (i) Ser mayor de 35 años y menor de 55 si se encuentran afiliados al ISS; o menores de 58 años si se hallan en los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima y contar con doscientas cincuenta (250) semanas, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan. (ii) Ser mayores de 55 años si se encuentran afiliados al ISS o de 58 si lo están a los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima y contar con quinientas (500) semanas como mínimo, previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan y (iii) Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El artículo 23 del mismo Decreto, consagra la posibilidad de suspender la condición de beneficiario cuando, durante un tiempo, adquiera capacidad para sufragar el aporte completo o «cuando suspenda voluntariamente la afiliación por no contar con recursos para realizar el aporte», pero podrá reactivar su calidad, avisando a la entidad que administra los recursos del Fondo.

Según el artículo 24 ibídem, se pierde el derecho al subsidio, cuando se adquiere capacidad para pagar íntegro el aporte, cuando cese la obligación de cotizar, se cumpla el plazo máximo para devengar el subsidio, **o se deje de cancelar durante 6 meses el aporte correspondiente, caso en el que «la administradora de pensiones correspondiente, tendrá hasta el último día hábil del sexto mes para comunicar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a**

**suspender su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este período».**

Significa lo anterior que **ni la suspensión, ni la pérdida del derecho al subsidio operan en forma automática y de pleno derecho**, sino que es indispensable que el Instituto informe a PROSPERAR sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar.

Para la Sala es claro, **especialmente en situaciones que involucran la afectación de un derecho de una connotación esencial como el de acceder a la pensión de una persona de la tercera edad, la necesidad de brindar la posibilidad de ponerse al día en el pago de la fracción de la cotización a su cargo, lo cual impone que la eventual falta de pago sea puesta en conocimiento del interesado para que adopte la conducta que estime pertinente en perspectiva de no comprometer su condición de beneficiario del esquema solidario y no poner en riesgo el acceso a la pensión de vejez. En todo caso, para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, que en esta ocasión fue menoscabado por la enjuiciada, en la medida en que no adelantó alguna diligencia para notificar al demandante de la supuesta irregularidad en el pago de sus aportes; es decir, le aplicó una sanción sin enterarlo sobre las razones que la inspiraron.**

Se revela, entonces, palmaria la indebida aplicación del artículo 24 del Decreto 3771 de 2007, en tanto le hizo producir efectos sin detenerse a verificar si se había cumplido el trámite que supone la adopción de una medida sancionatoria de tal significancia que podía llevar a la pensión de una persona de la tercera edad, en manifiesta situación de precariedad económica. En consecuencia, el cargo es fundado. (negrilla de la Sala).

El criterio jurisprudencial transcrito fue ratificado en sentencia **SL17912-2016**, mediante la cual se dirimió una controversia en la que el entonces ISS no contabilizó unos aportes porque tenían la anotación *«deuda por no pago del subsidio por el Estado»*. En esta oportunidad la Alta Corporación señaló que las supuestas deudas que pueda tener el Estado por el no pago del subsidio no pueden afectar al afiliado, máxime que no existía noticia o no se sabían *«los motivos del no pago del subsidio, como tampoco del cumplimiento por parte del Instituto sobre la obligación que tenía de informar a PROSPERAR sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar»*, retomando así lo indicado en la sentencia SL13542-2014. Y por la misma senda son las sentencias **SL 2390 -2021, SL 605 y SL 2553- 2022, SL 1328- 2022 y SL 252-2023**, entre otras.

Así las cosas, atendiendo los lineamientos jurisprudenciales reseñados, es evidente que para dar aplicación a la sanción prevista en el **artículo 24 del Decreto 3771 de 2007** cuando el beneficiario deja de cancelar durante seis meses o más el aporte correspondiente, es absolutamente necesario que la entidad administradora de pensiones informe, tanto al al Encargado Fiduciario sobre la supuesta falta de pago del subsidio por parte del afiliado como al interesado para que este adopte la conducta que estime pertinente en aras de no comprometer su condición de beneficiario del régimen subsidiado y para que ejerza su derecho de contradicción y de defensa en aras de que no comprometa su condición de beneficiario del régimen subsidiado y menos aún, el derecho a la pensión.

Y en términos semejantes se ha desarrollado el precedente constitucional, desde sentencias como la **T 518 y T 870 de 2012** las que la Corte Constitucional señaló que, a

partir de una interpretación literal del artículo 24 de la Ley 100 mal haría la corporación al concluir que la exigencia de cobro de los aportes debe entenderse exclusivamente para los empleadores y no para las entidades que concurren al pago de pensiones por medio de subsidios al aporte en pensiones del FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. Ha enfatizado por el contrario que, las cotizaciones efectuadas por dicho fondo se asimilan a las cotizaciones efectuadas por los empleadores por concepto de pensión, en tanto que en ambas situaciones los dineros se efectúan como aportes a la seguridad social y, tienen idéntico propósito, el cual es garantizar al trabajador, el cubrimiento de un porcentaje fijado por la ley para efectuar la totalidad del aporte.

En efecto, es claro que por los ciclos que a continuación se detallan, se deben tener todos de 30, por lo siguiente:

- **enero de 2005**, el demandante pagó aporte por 30 días, la entidad sólo incluye 8, hay que sumar **22 días**
- **enero 2006**, el señor TAMAYO OCHOA pagó aporte por 30 días, COLPENSIONES sólo incluye 21, hay que sumar **9 días**
- **octubre de 2012**, LUIS FERANDO TAMAYO pagó su aporte por **30 días**, el CONSORCIO PROSPERAR no lo hizo, su omisión con la de COLPENSIONES en el recaudo no son oponibles al actor: se debe incluir el ciclo completo.
- **agosto de 2013**, el demandante pagó aporte por 30 días, la entidad sólo incluye 28, hay que sumar **2 días**
- **agosto de 2015**, el señor TAMAYO OCHOA pagó aporte por 30 días, COLPENSIONES incluye 18 días en el ciclo: hay que sumar **12 días**

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a esta Sala de Decisión a CONFIRMAR la decisión de declarar la causación del derecho del señor LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA, porque al sumar a las 1.291,14 semanas que COLPENSIONES totaliza en la historia laboral, con los días que fueron irregularmente omitidos al momento de efectuar el análisis del derecho pensional, se contabiliza un total de **1.302,56** semanas para el 1 de marzo de 2016, fecha en que se reportó la novedad de retiro por su último empleador, GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S. Y en su caso, el derecho se causa el **25 de agosto de 2017**, fecha en la que cumplió **62 años**, de modo que concurre la causación y el disfrute en la misma fecha.

Se verifica por la Sala que tal como se anunció en la providencia, ninguna mesada prescribió al reclamar el derecho **el 30 de abril del 2018** operando la suspensión de la prescripción hasta la culminación del trámite administrativo con la Resolución **SUB 203820 del 31 de julio de 2019**<sup>10</sup>, y presentando la demanda dentro del plazo de tres años, concretamente el **14 de enero de 2020**<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01 / Pág. 34 - 37

<sup>11</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01 / Pág. 11

Se actualizará la condena desde el **25 de agosto de 2017** hasta **septiembre de 2023** con **13 mesadas** anuales por haberse causado el derecho con posterioridad al 31 de julio de 2011 en los términos del AL 1 de 2005; retroactivo que asciende a la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (69.448.571)**, conforme al siguiente detalle:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2017	4,09%	4,1	\$ 737.717	\$ 3.024.640
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023		8	\$ 1.160.000	\$ 9.280.000
			TOTAL	\$ 69.448.571

COLPENSIONES continuará pagando al señor **TAMAYO OCHOA** una mesada pensional a partir del **01 de octubre de 2023** equivalente a **1 SMLMV (\$1.160.000)** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993**. La entidad descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, descuento que opera por mandato legal (**SL1019-2020 y SL 1169 de 2019**)

6. INTERESES MORATORIOS

La Juez condenó al pago de intereses moratorios a partir del **30 de agosto de 2018**. Lo primero que debe señalarse es que, conforme lo definido en la sentencia de la Corte Constitucional **C-601 de 2000**, así como en las recientes providencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia - **SL1681-2020 y SL 3130 – 2020** -, la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de **resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales** y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones.

Por ello, esa corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como la sanción de intereses moratorios, encuentra un importante fundamento en el hecho de que la «[...] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que «Dada su



*conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial [...]» (CSJ SL1681-2020).*

En paralelo a lo anterior, esa corporación ha sostenido que los intereses moratorios son **simplemente resarcitorios** y no sancionatorios<sup>12</sup>; de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la *mora* en el pago efectivo de la obligación<sup>13</sup>, sin que sea necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe.

Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas, **pero no es éste el caso que aquí se presenta**, porque la pensión de vejez se encontraba claramente consolidada para el momento en que se solicitó el reconocimiento pensional el **30 de abril de 2018**<sup>14</sup>, de manera que solo se observa una tardanza injustificada en el reconocimiento de la prestación.

Siendo, así las cosas, y teniendo en cuenta el plazo legal de 4 meses con que contaba la entidad para el reconocimiento, se MODIFICARÁ la decisión, porque los intereses se causan a partir del **31 de agosto del 2018**.

## 7. COSTAS

Sobre las COSTAS debe indicarse que, al resultar vencida en la primera instancia y bajo las premisas del artículo 365 del Código General del Proceso, y en esta instancia no se causan COSTAS en su contra porque el análisis se hace en grado jurisdiccional de CONSULTA.

## 8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

**PRIMERO:** Se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, pero con las siguientes MODIFICACIONES:

- Al numeral **PRIMERO porque la condena en contra de COLPENSIONES** y a favor del señor **LUIS FERNANDO TAMAYO OCHOA** por concepto de retroactivo pensional causado desde el **25 de agosto de 2017** hasta **septiembre de 2023** asciende a la suma

<sup>12</sup> CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras

<sup>13</sup> sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892,

<sup>14</sup> Carpeta 01PrimeralInstancia / Archivo 01 / Pág. 15

de **SESENTA Y NUVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (69.448.571),**

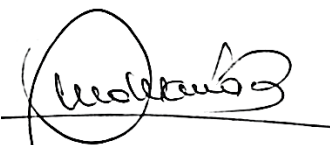
COLPENSIONES continuará pagando una mesada pensional a partir del **01 de octubre** equivalente a **1 SMLMV (\$1.160.000)** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993.**

- Al numeral **TERCERO**, porque COLPENSIONES pagará los intereses moratorios a partir del **31 de agosto del 2018** causados sobre el valor del retroactivo reconocido y las mesadas que se causen, desde la fecha en que debió hacerse el pago de la mesada y hasta el día efectivo de la cancelación de la obligación, a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de la providencia.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

**Las Magistradas,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**